

EL ABORTO Y SU ACTUALIDAD EN EL SALVADOR; LEY QUE DA PASO A DESIGUAL DE GÉNERO


Actividad 2.1 Avance nota periodística, Docente: Lic, Karla Escalante.

ALEJANDRA MARIELL MENJIVAR GOMEZ
FIORELLA GISELLE REYES SILVA
GRACIELA SARAI CAMPOS GARCIA

JOSELINE ALEXANDRA HERNANDEZ MEJIA
KARLA DANIELA AMAYA VEGA
MARJORIE DE LOS ANGELES JIMENEZ AGUILLON

El Salvador tiene una de las leyes más duras y estrictas en el mundo sobre el aborto ya que esta ley prohíbe todo tipo de interrupciones a pesar de que el embarazo sea de alto riesgo para la vida de la madre o sea por causa de una violación (Perasso y Duarte BBC, 2022)
Las políticas sociales y leyes como estas dan paso a que haya una exclusión y desigualdad de género en El Salvador.

LEYES SOBRE EL ABORTO EN EL SALVADOR



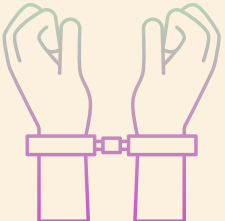
En el código penal de 1997 fue establecido que el aborto es **penalizado en todas las circunstancias**. Sanciones del artículo 133 al 137; Se penaliza a quien provoque un aborto con el consentimiento de la mujer o que esta misma se provoque su propio aborto con **2 a 8 años de prisión**; Y si este es sin consentimiento de la mujer se penaliza con **4 a 10 años de prisión**; Si este es realizado por un facultativo se penaliza con **5 a 12 años de prisión** además de inhabilitar el ejercicio de su profesión y de **2 a 5 años en prisión** a quien facilite los medios para que se practique un aborto. (Naciones Unidas, s.f)

TIPO DE EXCLUSIÓN -

Encontramos la inclusión por riesgo/exclusión por peligro ya que a las mujeres se les excluye de tomas de decisiones sobre el aborto, donde ignoran a quien están afectando realmente, aunque sí saben que las consecuencias caerán sobre ellas, dejándolas completamente fuera de toda posibilidad de evitación o resguardo ante las consecuencias de las decisiones que toman sobre sus cuerpos y su seguridad física e integral.

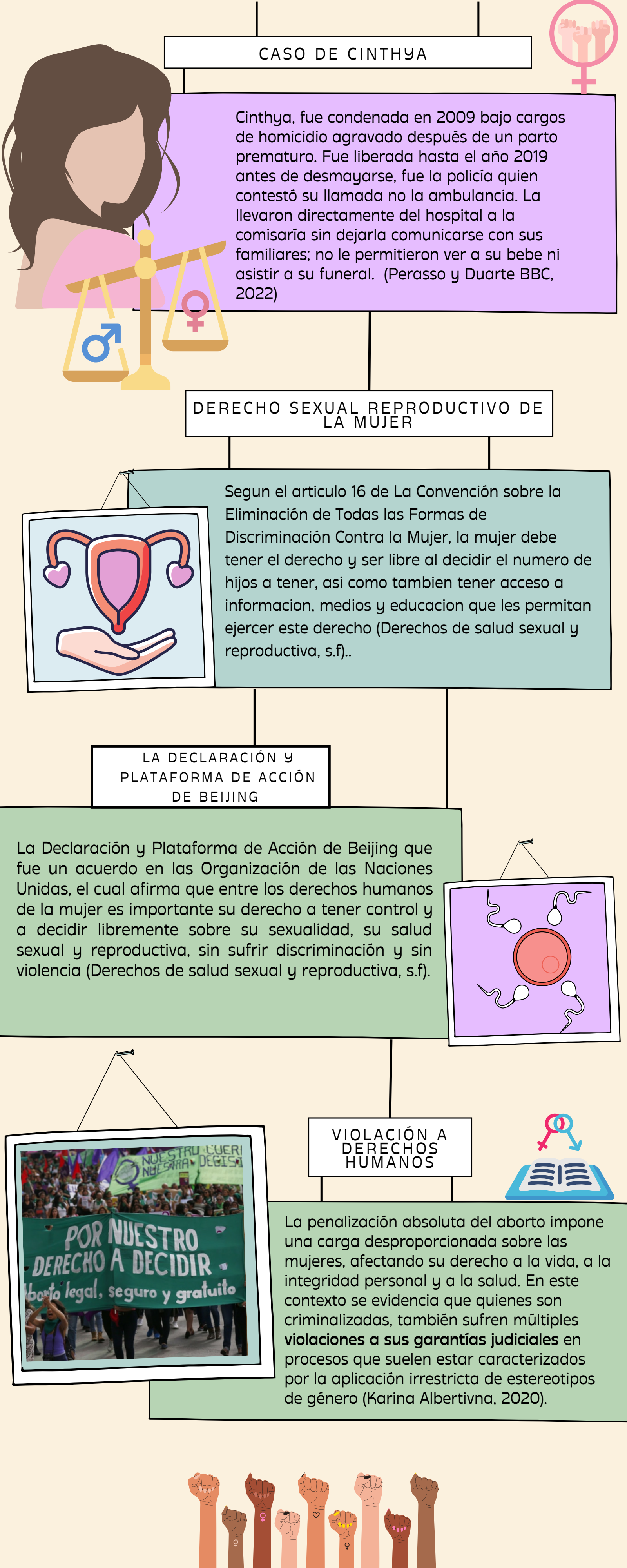
También consideramos la subinclusión, ya que, se niegan los derechos a las mujeres que sufren aborto por diferentes razones, es decir, se niegan a responder por ellos y por ende, niegan la base de cualquier posibilidad de inclusión positiva, pero si se reafirman las obligaciones que amenazan con el uso de la fuerza física frente a la desviación de la norma, dejando a las mujeres en condición de subinclusión con la ilegalidad como única alternativa (Mascareño y Carvajal, 2015).

EL CASO DE DESIGUALDAD E INJUSTICIA DE KAREN



Karen, una mujer salvadoreña de 22 años, fue condenada 30 años de prisión, después de complicaciones en el embarazo, acudió a urgencias donde despertó esposada a la cama del hospital. "Había mucha gente a mi alrededor y decían que le había quitado la vida a mi bebé y que iba a 'pagar por lo que había hecho'", le cuenta Karen a la BBC. (Perasso y Duarte BBC, 2022)





PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LA LIBERTAD Y GARANTÍAS JUDICIALES



La práctica en la criminalización de las mujeres que sufren emergencias obstétricas es la privación de la libertad sin la garantía de presunción de inocencia y con un incumplimiento de las garantías judiciales, que conforman la base mínima que resguarda la protección efectiva de los derechos fundamentales de quien está siendo procesado.



En el caso de El Salvador, se expone que las autoridades suelen hacer una apreciación parcializada de los hechos asumiendo que las víctimas son culpables del delito de homicidio agravado, ignorándose el delicado de salud en el que se encuentran y el grado de indefensión al momento de experimentar la emergencia obstétrica.



Asimismo, las mujeres suelen ser capturadas en dichos centros hospitalarios bajo la figura de la “flagrancia”, sin la presentación de órdenes de detención emitidas por autoridades judiciales, lo cual es una grave irregularidad. No se garantiza el derecho de presunción de inocencia, siendo una praxis que la palabra “aborto” en los expedientes implique en la práctica culpabilidad. Se observa que se realizan interpretaciones parcializadas y estigmatizadas de los hechos, omitiendo pruebas que puedan establecer la culpabilidad más allá de toda duda (Karina Albertivna, 2020).

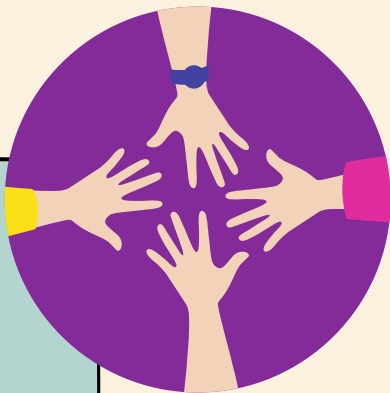


La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para afrontar el desafío de reducir la pobreza, promover el desarrollo sustentable y construir una buena gobernanza

-Kofi Annan

DERECHO A LA PRIVACIDAD

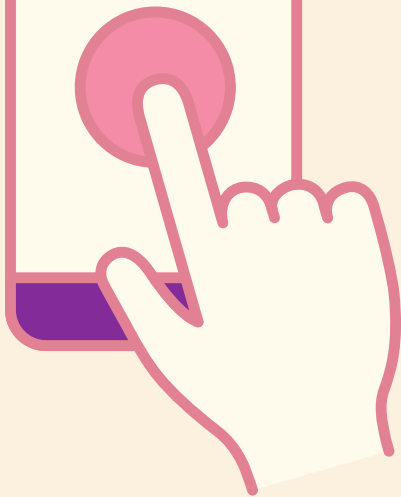
En el ámbito interamericano está comprendido en el artículo 11 del CADH denominado “Protección de la Honra y de la Dignidad”. El contenido establece en su segundo punto que “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación” (Karina Albertivna, 2020).



En El Salvador, el secreto profesional, En el artículo 265 de la Constitución Política se establece que tienen obligación de denunciar o avisar la comisión de delitos de acción pública los médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás personas que ejerzan profesiones relacionadas con la salud, que conozcan esos hechos al prestar los auxilios de su profesión, salvo que el conocimiento adquirido por ellos esté bajo el amparo del secreto profesional.



REPORT



La mayor parte de las denuncias se originan en los centros de salud pública, en clara violación al secreto profesional. Sin embargo, este no es sancionado por las autoridades, mostrando nuevamente la arbitrariedad en la actuación del Poder Judicial. Finalmente, debe mencionarse que el derecho a la privacidad no solo se viola con la ruptura del secreto profesional. Es crucial recordar que igualmente se viola ante la exposición de los expedientes judiciales en su integralidad por parte de la ONG Vida SV a través de su página web, con la connivencia del Estado (Karina Albertivna, 2020).

CAMPAÑA POR PARTE DE ACTIVISTAS A FAVOR DEL ABORTO



En nuestro país existe la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador

Esta agrupación difunde casos de los cuales muchos medios no hablan, como el caso del 29 de Julio de 2022, donde se aplicó la máxima pena que fue de 50 años de prisión a una joven de 19 años que sufrió una **emergencia obstétrica**. (Agrupación por la Despenalización del aborto en El Salvador, 2022)



